

## **LAS POLÍTICAS SOCIALES URBANAS EN EL CONTEXTO DE LOS PROCESOS GLOBALES (2000)<sup>1</sup>**

Lo que sigue son hipótesis de trabajo, que se plantean con toda la modestia que exige la enorme complejidad de los problemas que enfrentamos. Sin embargo, se plantean también con una fuerte convicción de que *es preciso modificar radicalmente el estilo de política social que viene predominando desde los '90 en nuestros países, y en particular en Argentina*. Esto significa modificar el sentido y contenido de las políticas sociales pero también el encuadre de las condiciones en las que operan y se configuran las expectativas, disposiciones y actuaciones de los actores —agentes y destinatarios— de las mismas. Y los programas de mejoramiento de los barrios pueden jugar un papel crítico respecto de tal propósito.

### **I. Lo local y lo global**

Se nos pide que hagamos referencia a lo global y, por tanto, a lo local. Al ámbito mundial, ubicuo, deslocalizado, y al ámbito cotidiano, el del encuentro primario, cara a cara. En este momento de cambio epocal, es usual afirmar que el tiempo y el espacio se están modificando. Pero no se modifican en abstracto, ni como precondition de lo material, sino como nueva temporalidad y espacialidad de los procesos y relaciones sin cuyo sustrato material en transformación lo anterior no tendría sentido como afirmación empírica. El tiempo y el espacio no existen independientemente de los procesos materiales, sean físicos, tecnológicos, económicos, culturales o psíquicos. Y esa gran transformación con que termina el siglo XX tiene efectos desiguales sobre las personas y las regiones y barrios del mundo, entre otras cosas porque la espacialidad y temporalidad también se modifica de manera diversa, y hasta opuesta. No alcanza con decirnos que la globalización nos trae problemas pero a la vez nos abre oportunidades, o que la palabra crisis en japonés quiere decir oportunidad, si la distribución de problemas y oportunidades entre personas, generaciones, géneros, etnias, países, comarcas y barrios es crecientemente desigual.

Aquí mismo, mientras para algunos sectores y barrios —los que la *ciudad alta*— se está ampliando su ámbito de acción, desplazamiento y comunicación, y se están acelerando las velocidades de movimiento y contacto, para otros, los de la *ciudad baja*, el barrio puede convertirse en un territorio estrecho del cual no pueden salir, entre otras cosas porque no pueden afrontar ni los costos mínimos de transportarse cotidianamente para buscar trabajo. Por un lado, ciudadanos del mundo global; por el otro, personas sin ciudadanía ni derechos elementales. Esto está asociado a un acceso claramente diferenciado a servicios, modos de gestión, espacios de decisión pública, al reconocimiento social, a la seguridad personal, y, por supuesto, al empleo y el ingreso. Con todas las situaciones intermedias que, por supuesto, existen, es innegable la polarización social de las ciudades latinoamericanas y su proyección territorial en términos de nuevos *ghettos*, de barreras internas, sociales y hasta físicas, infranqueables, y de accesos muy diversos a las posibilidades que la nueva economía puede ofrecer.

---

<sup>1</sup> Ponencia presentada en el Encuentro Latinoamericano de Programas de Mejoramiento de Barrios, organizado por PROMEBBA; Buenos Aires, 19 de octubre de 2000.

Este proceso de transformación, muchas veces asociado al término "globalización", que en realidad es sólo un aspecto y no se aplica a todos los procesos por igual, trae aparejada la necesidad de repreguntarnos qué es lo local, alcance que sin duda se asocia a la realidad de un barrio e incluso a zonas amplias de una región metropolitana. No siendo este el tema central de este panel, baste decir que, en la contraposición entre lo local y lo global, lo "global" no es algo que está afuera, algo externo al ámbito local, sino que los procesos de orden global atraviesan los procesos y posibilidades de los habitantes de un barrio. Se puede volver tan cotidiano y libre de barreras territoriales el intercambio de mensajes entre continentes, desde la casa o el locutorio, como el saludo a los vecinos de la cuadra. A la vez, parece difícil controlar incluso lo cercano, cuando condiciones tan elementales como el empleo y el ingreso se remiten a causas y detonantes que se ubican en lugares y centros de decisión o acción remotos (como las famosas crisis del tequila, del vodka, del arroz, de la caipirinha).

Bajo el tema de la descentralización (o de la retirada del Estado), se asigna a los gobiernos y agentes sociales locales la responsabilidad de dar respuesta a una problemática social aguda. Se nos pide que hablemos de política social urbana, pero en realidad habría que hablar de política urbana (no en el sentido urbanístico) o de políticas públicas *en o para* la ciudad. Y aquí cabe recordar que los gobiernos locales han experimentado una tremenda pérdida de capacidad para incidir sobre la calidad de vida, que en buena medida depende del acceso a bienes y servicios, al quedar prácticamente como mediadores pasivos de los precios y calidades de los servicios urbanos, del abastecimiento de medios de primera necesidad, de los alquileres, todos ellos determinantes del costo de vida.

Los monopolios que controlan los servicios en la región metropolitana de Buenos Aires (agua, gas, electricidad, transporte y peaje, teléfonos, etc.), así como buena parte de la distribución minorista, los servicios bancarios, etc., ponen condiciones muy duras para la vida, que se expresan sintéticamente en que somos la tercera ciudad más cara del continente americano. Agreguemos a esto un sistema impositivo sumamente regresivo que agrega a las ganancias monopólicas el facilismo de cobrar impuestos al consumo antes que a los grandes beneficiarios del proceso de concentración del ingreso y la riqueza. La desocupación, la subocupación-sobreocupación y la precariedad generalizada de los empleos disponibles hacen difícil resolver a nivel local la cuestión social que resulta de esta dramática situación.

## **II. Política social y política económica**

La concepción de que la economía opera necesariamente como un mecanismo natural, separable y efectivamente separado de la sociedad, es falsa. En cuanto a la política pública, la realidad es que el conjunto de las políticas públicas está subordinado, a través de la primacía de la política macroeconómica neoliberal, a la lógica de acumulación del capital financiero global y de los intereses de los grupos económicos monopólicos radicados o "virtualmente" radicados en la Argentina. Esto se expresa en la autonomización de la política económica con respecto a la *política*. Para una versión crudamente funcionalista, se deja a la política el lograr la gobernabilidad de la sociedad para facilitar el libre funcionamiento del mercado. Para una versión moral, la política tiene que hacer efectivamente más equitativa a la sociedad, compensando los efectos originales inevitables

del juego de mercado. Pero ambas versiones parecen converger en justificar las políticas sociales focalizadas en los sectores más pobres.

Los "costos" sociales de la liberación del capital se justifican en nombre de una promesa incumplible: el tan ansiado crecimiento económico que nos espera al final del túnel, que nos traerá nuevamente empleos e ingresos para los excluidos, recursos para regenerar las ciudades degradadas por décadas de desinversión pública... Para eso se defendió la exención impositiva y la desregulación del mercado de trabajo en nombre de nuevos empleos que nunca se produjeron, pero los beneficios para el capital fueron apropiados de todas maneras. Se dice que debemos ser responsables honrando la deuda externa y llevando a cero el déficit fiscal, minimizando el gasto público, haciendo cuanto sacrificio sea necesario hasta lograr que nos califiquen como país sin riesgo, "liberado" para la inversión global. Mientras tanto, ya han estado introduciendo capitales, pero no para generar fuentes de empleo y poner el país en condiciones de competitividad internacional mediante la producción de bienes transables de alta calidad y alto valor agregado, ni menos aún para poner en marcha y realimentar un proceso de acumulación nacional y crecimiento autosostenido e integrador de una economía nacional pujante, sino para:

- comprar barato y luego revender o explotar a buen precio nuestro patrimonio público;
- obtener contratos de concesión que brindan poderes monopólicos sobre uno de los principales recursos que tienen nuestras principales ciudades: un mercado interno concentrado y de altos ingresos medios y con necesidades insatisfechas de servicios indispensables;
- controlar los recursos naturales renovables y no renovables y apropiarse de las rentas que genera su explotación, agregando a esto un comportamiento monopólico sobre el abastecimiento nacional de energéticos;
- realizar inversiones financieras, atraídos por altas tasas de interés, garantizadas por el patrimonio público y un compromiso político de permitir el drenaje de capital y de honrar la deuda externa, cualquiera que sean sus condiciones u origen, y una política fiscal que evita controlar para no afectar a los que detentan las grandes ganancias;
- copar el mercado interno de abastecimiento minorista de bienes y servicios, adoptando políticas de sujeción si es que no la destrucción de la producción nacional (recurriendo a la importación e incluso al contrabando).

Para muchos, este modelo no cierra políticamente si el Estado no se hace cargo de la tarea de controlar a los sectores productivos y las mayorías empobrecidas como resultado del mismo. En este país, cuando se habla de "seguridad jurídica" se hace referencia eufemísticamente, a la garantía de que el enriquecimiento ilegítimo quedará impune y que el drenaje de recursos (por el cual terminamos aportando recursos netos al Norte) se garantizará cualquiera sea su costo social. Esto implica que no habrá libre expresión de la voluntad ciudadana en materia económica.

El ajuste sin fin se complementa entonces con un sistema de asistencia pública, pero sin recursos suficientes para lograr la tarea de contención política. Se pretende resolver esta contradicción mediante la eficientización del gasto social, focalizándolo en los sectores de mayor indigencia y tercerizando la gestión de los programas a manos de ONG, asociaciones solidarias de trabajadores voluntarios e incluso empresas, para bajar los costos burocráticos. Se introyectan en la política social mecanismos y valores del mercado, que para el fundamentalismo neoconservador es la forma más apta para organizar toda actividad

humana. En las condiciones reales, la focalización significa nada más ni nada menos que la institucionalización de la pobreza. Carnets de pobre, pobres programas para pobres, *ghettización* de los pobres en asentamientos para los que el concepto técnico de "necesidades básicas insatisfechas" resulta groseramente insuficiente.

Las nuevas políticas sociales no están entonces en capacidad siquiera de garantizar las condiciones políticas que reclama la política económica neoliberal para avanzar hacia un objetivo que es, de todas maneras, incumplible. La ciudadanía limitada apenas deja al electorado la posibilidad de forzar el recambio de gobernantes, sin que las políticas de Estado realmente cambien. Por eso, pero no principalmente por eso, las políticas sociales tendrán que cambiar radicalmente.

### **III. De las políticas sociales a las políticas socioeconómicas: atender a la emergencia con una perspectiva de desarrollo**

Hay varios errores de concepción de la política social. Su matriz sigue marcada por la época en la que la pobreza era fundamentalmente rural. Hoy es en las ciudades donde se concentra el grueso de la población pobre. Desde el concepto de necesidad básica hasta el de comunidad, no pueden aplicarse sin tener en cuenta las características concretas de la sobrevivencia en una sociedad compleja, urbana. No alcanza con cajas de comida cuando vivir en una ciudad implica poder transformarse por medios públicos, tener electricidad, acceso a comunicación de masas, seguridad personal, etc. Poner a trabajar temporalmente a un habitante urbano no es más que una política disfrazada de transferencia de ingresos, equivalente a un "inseguro" de desempleo, si no se lo dota del conjunto de recursos, capacidades y vinculaciones que requiere la producción en la ciudad.

Otro error de concepción es pensar la política social como respuesta a una emergencia que afecta coyunturalmente a sectores marginales, cuando el problema es masivo, estructural y de largo plazo. Ese tipo de políticas es económica y políticamente insostenible. El monto de recursos que sería necesario para mantener mediante transferencias a un tercio de la población viviendo en condiciones de mínima dignidad afectaría aún más el funcionamiento del modelo económico, centrado en un fiscalismo exacerbado y en la defensa de los intereses de las élites. Y las clases medias, sobre las cuales siguen recayendo los impuestos, no van a aceptar ser las que paguen la cuenta de atender a los pobres que crea el enriquecimiento del 10 ó el 5 por ciento de la población.

En cualquier caso, el problema no es lograr algo más que recursos para lo mismo, ni alcanza con la excusa de que no nos dan recursos o el ya instalado "no hay plata", pues, aún si la hubiera, usarla para hacer lo mismo, o incluso hacer más eficientemente lo mismo, no resolvería la cuestión social que enfrentamos en nuestras sociedades, y en particular en las ciudades.

Hay una alternativa: romper con el modelo del asistencialismo —más o menos eficiente pero siempre ineficaz desde la perspectiva del tipo de sociedad en la que supongo que queremos vivir todos los que aquí estamos— y pasar a la promoción firme, continuada y eficiente de un desarrollo socioeconómico sustentable y sostenible, integral e integrador. Y hacerlo desde todos los ámbitos pero, fundamentalmente, desde el ámbito local: barrio, comarca, zona, región, ciudad. Pues para lograrlo es preciso movilizar las energías sociales de todos los actores socioeconómicos de manera directa, no mediante mecanismos ciegos basados en incentivos monetarios e individualistas como los del mercado que hoy

predomina. Es preciso que se generen otros mercados, y también otros escenarios políticos, donde afloren a la superficie los intereses y se regulen los conflictos, institucionalizando espacios en los que se puedan acordar vías de salida del juego suma-cero, en que predominen la emulación y la cooperación por sobre la competencia.

Esto requiere meterse con la economía. Que la política pública social se introyecte en la política económica como política socioeconómica: que se generen otras estructuras económicas, más solidarias, cooperativas, sustentadas en otras relaciones sociales y otras reglas de reciprocidad y distribución. El sentido de esas estructuras no es la acumulación sin límites sino la reproducción ampliada de la vida humana. Su factor económico fundamental no es el capital, el crédito, sino el trabajo, las capacidades humanas de producir en sociedad las condiciones de vida para todos los ciudadanos. Sin un desarrollo importante de tales estructuras no habrá crecimiento integrador.

La relación entre crecimiento y desarrollo social es la inversa de la que propugnan los *gurús* neoliberales de la gestión macroeconómica. El crecimiento no puede ser la precondition del desarrollo social (mucho menos cuando aquel está inspirado por el interés de las minorías y la lógica del capital financiero), sino que deben ser la resultante de la multiplicación de oportunidades de trabajo altamente productivo, de bienes y servicios pero también de relaciones valiosas, generando un ingreso equitativamente distribuido y estimulando una inversión empresarial responsable. Tenemos trabajadores con capacidades y recursos variados y tenemos ingentes necesidades por satisfacer. La política económica debe proveer el marco adecuado para conectar esos elementos bajo la forma de desarrollo económico social, no de la acumulación del capital más concentrado, que destruye al capital más chico, al empleo, y que excluye a amplias mayorías.

No todo trabajo toma la forma de empleo. Hay un enorme potencial de resolución de necesidades que no pasan por la forma del trabajo con remuneración pecuniaria. De hecho, programas como los de ustedes son una prueba palpable de que es posible mejorar la calidad de vida con fuertes componentes de trabajo voluntario, comunitario, solidario. Sin embargo, en una sociedad moderna, el empleo seguirá siendo importante. Pero no hay política de empleo sectorial, al lado de otras, radicada en un ministerio. El objetivo estratégico de organizar o facilitar la emergencia de nuevas estructuras basadas en el trabajo, generadoras de ingresos de manera sostenible, debe atravesar todas las políticas públicas. Supone aumentar y redirigir los recursos públicos —los estatales de todos los niveles, pero también los sociales— para movilizar la creatividad y el emprendimiento, para potenciar capacidades productivas y competitivas, de satisfacción de necesidades básicas de las mayorías, desde los barrios o las comarcas, las ciudades y las regiones, para poner en marcha el desarrollo de nuevos mercados, más solidarios. Una ordenanza o una ley que redirija el gasto público con participación efectiva de una ciudadanía que fije las prioridades; una educación que vincule a la escuela y a la universidad con los problemas de su contexto, que capacite no sólo en el aula sino en situaciones de aprendizaje vinculadas a trabajos reales, a la resolución efectiva de problemas; un sistema de capacitación que se descentralice y acompañe la conformación de nuevos sistemas productivos, eficientes y de alta calidad; un sistema de salud pública que ataque de raíz las causas de la enfermedad reorganizando el hábitat, la cultura del vecino, los hábitos familiares y comunitarios.

Es esencial que los gobiernos y sociedades locales dejen de ser ensambladores o distribuidores (con criterios muchas veces clientelares) de programas diseñados sectorialmente y a distancia. Una parte creciente de los recursos debe ser para crear fondos para el desarrollo local sostenible, administrados de manera transparente por órganos

apropiados de gestión y definición de proyectos, y evaluación de oportunidades y prioridades.

Aquí es esencial que la gente esté activa, cualquiera sea su edad y condición: estudiando, capacitándose, informándose, encarando problemas del barrio o la ciudad, participando en el diseño de proyectos productivos de bienes y servicios para el mercado o de mejoramiento directo de las condiciones de la calidad de vida. La economía y la competitividad tienen claras bases culturales, subjetivas, y la autoestima, la pertenencia a una comunidad, el reconocimiento de la propia historia, la expectativa de que es posible cambiar las cosas, deben ser alimentados con experiencias positivas, con formas de trabajo genuino, con posibilidad de sostenibilidad. En ese sentido, los planes Trabajar no cumplen ese cometido. Tampoco las pasantías. Esos recursos pueden ser redirigidos a la conformación de nuevos sistemas de producción y circulación sostenibles en el mercado. Esto requiere otros recursos, como el crédito o el acceso a insumos, pero también a reconocimientos, a anticipaciones de algunas oportunidades iniciales, y el desarrollo de la capacidad para captar o crear otras nuevas; requiere ambientes de confianza mutua, de organización y participación democrática.

#### **IV. Del perfeccionamiento de la focalización a su superación: trabajar con conjuntos sociales heterogéneos y unificar el sentido de las políticas**

Si hablamos de ciudades estamos hablando de sociedades que, aunque son locales, son también heterogéneas. Se puede focalizar la distribución de alimentos o vacunas, pero no es posible focalizar un proceso de *desarrollo* integral, o la integración a una futura sociedad del conocimiento. Pretender hacerlo con los pobres y para los pobres —si bien debe asegurarse su integración y su salida de la categoría de pobres— equivaldría a un remedo de desarrollo. Por lo demás, la masividad de la pobreza, del desempleo y de los procesos de degradación de la convivencia humana en las ciudades requiere que todos los recursos y voluntades sean movilizados en pro del desarrollo, y esto incluye no sólo a los pobres estructurales y a los nuevos pobres, sino también a los sectores medios, a los pequeños empresarios, a las corporaciones profesionales, a los agentes públicos y de la sociedad civil, etc., pues todos ellos tienen importantes recursos para aportar, no sólo como voluntarios filantrópicos sino como beneficiarios directos o indirectos de tan desarrollo. Es preciso poner en marcha procesos, pero de manera sinérgica, de modo que las iniciativas particulares se realimenten mutuamente. Y en esto juegan un papel importante los mecanismos de mercado, si están socialmente regulados y si se pone límites morales y legales a la explotación del trabajo ajeno.

Los programas para microemprendimientos, los programas de capacitación, los programas para Pymes, vienen fracasando estrepitosamente, porque ofrecen tratamientos aislados (impregnados además del sentido de política social antes que económica), pues no advierten la necesidad de encarar de manera integral el apoyo a la producción, impulsando o facilitando el desarrollo de sistemas productivos, muchas veces —aunque no necesariamente— con una base territorial local o regional, basados en relaciones y productos de alta calidad. La estrategia de generación de nuevos mercados debe advertir que los comportamientos de los compradores están en buena

medida determinados por las estrategias simbólicas de las grandes empresas; que construir mercados más equitativos implica una lucha cultural, implica informar al comprador de las consecuencias que tienen sus decisiones, de qué sociedad producen las decisiones que aisladas parecen insignificantes, pero que en conjunto tienen la fuerza de la masa. Los mercados de productos ecológicos, de productos étnicos, de productos de solidaridad política, de productos que generan empleo local, de productos elaborados por los miembros de una misma comunidad (como las redes de trueque han demostrado) existen y en algunos casos alcanzan ámbitos internacionales.

La generación de hábitat es una importante inversión económica, que requiere y genera recursos. En esto es importante que la vivienda y sus redes, el barrio mismo, sean reconocido como espacios de producción y reproducción y no meramente como espacios residenciales. Es fundamental reconocer que la vivienda autoconstruida no es sólo un valor de uso, y que la valorización de las viviendas populares es un objetivo económico en sí mismo. Las condiciones de convivencia, la confianza y el espíritu de cooperación entre vecinos, o la seguridad del barrio, son no sólo elementos de la calidad de vida sino también condicionantes de la posibilidad de desarrollar actividades económicas sostenibles. Cuando ustedes contribuyen a la generación de un hábitat popular de calidad y lo hacen produciendo a la vez otras relaciones sociales y otras experiencias, desarrollando capacidades, están realizando una actividad económica, aunque no genere ganancias, porque satisface necesidades y multiplica las opciones al alcance de la gente, que es el verdadero sentido de la economía. Pero además están cambiando la cultura, porque la experiencia de que es posible mejorar la calidad de vida, la comprobación empírica de que las capacidades de la gente que el mercado que el mercado actual no valora existen y son económicamente útiles, es algo fundamental para cambiar las expectativas, los valores y las disposiciones de los vecinos.

La política social en las ciudades incluye la política educativa, no sólo en cuanto al acceso físico a las escuelas sino también con respecto a la calidad de las relaciones y aprendizajes que se generan en su interior y en sus relaciones con la comunidad. Es preciso producir una auténtica revolución educativa, que los niños y jóvenes puedan (becas, acceso) y quieran estudiar (pedagogía que conecte al niño o al joven y sus nuevas capacidades en el nuevo modelo comunicativo, con el conocimiento y los procesos de formación escolarizada), desarrollar sistemas de pasantías que no afecten los derechos de los trabajadores, principalmente en el Estado o en organizaciones sin fines de lucro, propiciando la formación de una generación de promotores del desarrollo socioeconómico. Esto permitirá pasar de las ventanillas lejanas (sean múltiples o únicas) a la mediación desde el campo mismo de la producción y la reproducción, posibilitando dar respuesta de alta calidad y pertinencia a la formación y el aprendizaje permanentes. Si decimos que faltan recursos, recordaremos que hay una fuerza socioproductiva formidable que estamos anulando: la juventud. Cuando la juventud es vista como un no-adulto, como un problema, no se advierte que si se habilita a las y los adolescentes para que asuman y encaren problemas sociales muy diversos —en sus propios términos, sin ser usados como masa de maniobras electoral ni encuadrados en las concepciones adultas de la acción, de los procedimientos, de los tiempos—, tienen una capacidad extraordinaria de identificar y resolver problemas, de generar espacios de convivencia, de hacer sociedad, de innovar y producir, de organizar y organizarse.

No alcanza con gestos ni con inyecciones temporales de recursos. El desarrollo exige cambiar estructuras y comportamientos. Se precisa generar plataformas de servicios

sostenidos que acompañen a las diversas formas de economía social y a las Pymes. Los gobiernos locales, los centros tecnológicos, las universidades, las ONGs, las redes solidarias, los sistemas de ahorro y crédito popular, pueden ser artífices de esa plataforma. Y para ello hay que luchar contra el academicismo, el autoritarismo tecnocrático, la institucionalización del saber como poder.

No solo hacen falta voluntades para redireccionar los recursos hoy dedicados al asistencialismo, sino también *más* recursos. Hay recursos de la economía popular que están inactivos, desvalorizados por el mercado real; hay recursos financieros que unidos logran fuerza; pero sobre todo hay recursos financieros que están en los bolsillos de quienes vienen gozando de la impunidad fiscal. Es preciso modificar la distribución del ingreso: cobrar los impuestos que no se cobran y dejar de introducir nuevos candados fiscales a favor del gran capital que hacen cada vez más regresivo el sistema de recaudación. Es imprescindible reubicar los límites entre lo legal y lo ilegal, favoreciendo no al gran capital sino a los emprendimientos populares, declarándolos exentos de impuestos hasta un nivel significativo de actividad, liberando a su trabajo de los costos de la ilegalidad.

Pero estamos llegando a un punto en que será necesario recuperar lo que no se cobró en el pasado. La presión brutal de una deuda externa ilegítima en sus orígenes y en la distribución de su carga va a tener que ser encarada en algún momento. Si oficialmente se acepta que hay una evasión de sectores de altos ingresos y ganancias empresariales de por lo menos 15.000 millones anuales, en estos diez años se han acumulado riquezas ilegítimas que alcanzan para pagar totalmente la deuda externa y poner en marcha estos programas de manera masiva. Ya no va a alcanzar con el aún inalcanzable objetivo de mejorar la distribución del ingreso anual futuro. La prolongada impunidad fiscal nos ha llevado a una situación en la que ya es preciso afectar derechos de propiedad, logrados en base al incumplimiento de leyes, a la evasión fiscal, al logro de ganancias en base a la corrupción.

Es preciso regular los mercados de servicios urbanos. No se puede ser competitivo desde una ciudad con servicios a la producción y al consumo controlados por monopolios. En esto, los movimientos de consumidores-usuarios y los sectores empresariales productivos pueden jugar un papel crucial, para consolidar una alianza a favor de la regulación y la revisión de contratos ilegítimos, si es que son legales. Para hacer esto es preciso que la democracia delegativa vaya dejando paso a una democracia participativa, donde los gobernantes estén realmente ligados al pueblo y se sientan respaldados y con poder para negociar y enfrentar otros poderes. Los gobernantes que se supone son depositarios de toda la responsabilidad por resolver los problemas, y que a lo sumo pagarán por sus errores en las siguientes elecciones, tienden a recostarse en el establishment, sea cual fuese su discurso cuando son oposición.

Tenemos que resguardar el patrimonio público evitando su privatización definitiva y, cuando convenga y se pueda, revirtiéndola. Hoy la escuela y la universidad pública están bajo ataque, desde un proyecto de privatización y dualización del sistema educativo. Ustedes conocen muy bien la relevancia de regenerar un espacio público urbano de libre acceso y encuentro de todos los ciudadanos. Debemos vigilar que iniciativas como la del Portal Educativo se conviertan en un caso más de la acción del Estado para abrirle mercados al capital. La nueva economía del conocimiento posibilita que el conocimiento se encarne en los trabajadores, en los ciudadanos, o que sea monopolizado y vendido como mercancía por el gran capital. Este es un terreno donde ya mismo debemos estar actuando para evitar esa tendencia.

La movilización de capacidades y voluntades desde los niveles locales requiere capacidad de convocatoria, y esto supone credibilidad, autenticidad, transparencia. Un estilo político menos controlador y acumulador de votos y más mediador entre los diversos sectores de la sociedad alrededor de objetivos de bien común. La gestión responsable y transparente es fundamental, y se asegura con un efectivo control ciudadano del uso de recursos públicos.

Sí, en nombre del pragmatismo, se responde que todo esto es imposible, entonces estaremos renunciando a cambiar la sociedad, y sólo restará aceptar esta sociedad como definitiva, si es que no una aun peor. Resulta tautológico decir que no se puede cambiar la sociedad sin cambiar la sociedad, o que no se puede democratizar un país sin afectar las estructuras de poder. Si esto no se acepta, que quede claro que se habla de democracia y de equidad como recurso discursivo para ocultar la consolidación de su contrario. Afortunadamente, están en marcha procesos en toda la región que comienzan a mostrar la posibilidad de otros caminos; viejos y nuevos actores están innovando en este terreno, y tenemos que reconocer y conocer en profundidad esas experiencias, saliendo del localismo y la sensación de soledad, aceptando el reto de ser ciudadanos del mundo. Este encuentro latinoamericano contribuirá, sin duda, en esa dirección.